

## Claroscuros en manejo de fondos Covid-19 en Nicaragua

17 de noviembre del 2021

*El gobierno de Nicaragua ha recibido millonarios fondos económicos para el manejo de la pandemia causada por el Covid-19, pero no se ha logrado ejecutar eficientemente. Tampoco se tiene claro cuánto ni en qué se ha utilizado el capital otorgado vía donaciones y préstamos relacionados para hacerle frente a la pandemia.*

Veinte meses después de la aparición del primer caso de coronavirus en Nicaragua, en marzo del 2020, existe una falta de transparencia en cuanto a la administración de fondos recibidos para hacerle frente a la pandemia.

Según el estudio **Covid-19 y opacidad: la fórmula de la muerte en Nicaragua**, el gobierno destinó a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) un presupuesto en el 2021 cifrado en 5014.7 millones de córdobas para tratar el tema del Covid-19.

De esta cifra, según el MHCP, se ha logrado ejecutar 1029 millones de córdobas entre enero y septiembre de ese año, es decir, apenas el 20.5% cuando falta solo un trimestre para concluir el año.

Se desconoce hasta el momento del porqué no se ha logrado ejecutar el otro 79.5% de ese presupuesto, tampoco qué ha pasado con la ejecución de otros fondos provenientes de organismos internacionales a través de préstamos o donaciones ni de la información sobre contratos y empresas beneficiadas como proveedoras en torno a estos recursos económicos.

“En Nicaragua todo es opaco, lamentablemente es que el factor de discrecionalidad que, es necesario a veces, se ha convertido en arbitrariedad. No se está publicando la información presupuestaria necesaria ni la relacionada a las adquisiciones que se están realizando en el contexto de la pandemia”, explicó un experto consultado para el estudio y que pidió el anonimato.

Aparte del presupuesto designado por el gobierno con fondos estatales para paliar la pandemia, Nicaragua ha recibido millonarios recursos económicos provenientes de organismos internacionales y gobiernos mediante esquemas de préstamos y donaciones, pero, igual que lo sucedido con los fondos propios, no se ha logrado ejecutar a cabalidad dichos fondos externos, así como tampoco se tiene claro en qué y cómo se ha ejecutado, según se desprende del estudio.

Respecto de cuánto ha recibido del exterior, el estudio recoge información del BCIE, FMI y Banco Mundial bajo esquema de préstamos. “El BCIE hizo cuatro créditos por el orden de 252.7 millones de córdobas, el FMI 2, 642 millones de córdobas en un programa sanitario, el Banco Mundial 197 millones de córdobas”, apuntan.

De estos recursos, “lo único comprobable es la ejecución que el Estado ha realizado en cada caso: del BCIE no gastan aún 228.3 millones de córdobas, del FMI solo han gastado 78.4 millones de

córdobas, el BID en cambio se han invertido 74.2 millones de córdobas de 287.3 millones de córdobas”, cita el estudio **Covid-19 y opacidad: la fórmula de la muerte en Nicaragua**.

En cuanto a donaciones, tampoco se tiene claro sobre su ejecución. Taiwán, entonces aliado del gobierno de Nicaragua, proveyó de recursos económicos equivalentes a 139.2 millones de córdobas entre enero y septiembre del 2021, “de los cuales no han ejecutado 97.6 millones de córdobas”, según los investigadores encargados del estudio.

Para los expertos responsables del estudio, la incapacidad de ejecutar adecuadamente los fondos puede sostenerse a una ineficiencia administrativa, que incluso tiene otro dato relevante: “las compras para enfrentar el Covid 19 se iniciaron cuatro meses después” de que se informó del primer caso en el país, según se desprende de los datos de la página Nicaragua Compra.

Ante esta situación, llama la atención del silencio de los organismos internacionales y más bien han optado por no brindar respuestas a las preguntas de distintos sectores, especialmente de medios independientes.

Dada la falta de transparencia, la poca información que se obtiene de parte del gobierno ha sido por el condicionamiento que ponen los organismos internacionales para desembolsar préstamos, mismos que fueron manejadas entonces por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Se agregaron al Programa Mundial de Alimentos (PMA) como contraparte adicional en el primer préstamo y a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el segundo, según la información publicada en los medios de comunicación.

Estos organismos lograron en enero del 2021 que el gobierno se comprometiera a publicar información, misma que había sido ocultada, tal como sucedió con las pruebas Covid-19 realizada a los ciudadanos.

“En 2020, el ejecutivo cedió a supervisiones más estrictas del FMI y el BID para acceder a la entrega de un préstamo de 185.3 millones de dólares (noviembre) en el primer caso, mientras en el otro fue para obtener un monto de 43 millones de dólares (agosto)”, cita el informe completo de **Covid y opacidad: la fórmula de la muerte en Nicaragua**.

Aunque se tiene información escasa sobre qué empresas fueron beneficiadas, se tiene conocimiento que dos empresas conocidas recibieron la adjudicación de casi dos millones de dólares. Se trata de la distribuidora Cruz Azul, relacionada a funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y Universal Marketing Associates, relacionado con una ex viceministra de esta misma institución, refiere el estudio.

Finalmente, en esta danza de dinero sin auditar existe otro misterio sobre los ingresos que percibe el Ministerio de Salud por el pago de \$150 que hacen los ciudadanos por las pruebas de Covid-19, impuesto como un cobro obligatorio para que los mismos puedan viajar fuera del país.

Al respecto, citan los investigadores en el estudio, “en el informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en el rubro correspondiente a rentas con destino específico en el Ministerio de Salud, que engloban los pagos de los nicaragüenses al recibir un servicio del Estado, los ingresos suman 424, 672.02 córdobas entre enero y septiembre de 2021, es decir casi 12 mil dólares”.

Para los expertos, el dato anterior resulta nada “creíble”, dado que eso refleja que solo se han hecho 80 pruebas en lo que va del año y no corresponde con la denuncia de los mismos ciudadanos, quienes desde enero pasado afirman que se hacen grandes aglomeraciones para poder practicarse las pruebas.

Y concluyen que “la falta de transparencia con estos ingresos es solo una muestra de todo un sistema caracterizado por no rendir cuentas y administrarse en la oscuridad”.